

Que consta por los justificantes que ha acompañado la misma autoridad á su informe, que no se habia comprendido en el remate de la finca un lote que estaba agregado á esta, por no estar aun avaluado; pero sin que por esto se pretendiera menoscabar en nada los derechos que el quejoso tenia adquiridos sobre el expresado lote.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta:

Primero: es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez 2º de Distrito en 3 de Mayo del presente año, en la parte que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. José Gil de Partearreño, contra los procedimientos del Juez 3º de lo civil, por violacion del artículo 27 de la Constitucion.

Segundo: se revoca la misma sentencia en la parte que concede el amparo á dicho ciudadano, por violacion del artículo 14 de la Constitucion, y se declara: que tampoco procede el amparo por violacion de esta garantía.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, publicándose y archivándose á su vez el Toca:

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias. Juan J. de la Garza. José María Lozano. José Arteaga. Ignacio Ramirez. M. de Castañeda y Nájera. Ignacio M. Altamirano. Simon Guzman. Luis Velasquez. M. Zavala. Enrique Landa, secretario.*

Es copia que certifico. México, 29 de Agosto de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. D. Francisco Gomez Daza, en representacion de la testamentaria de D. Claudio A. Limon, contra los procedimientos y sentencia de remate dictada por el Juez de 1ª instancia del Canton de Jalacingo de dicho Estado, en el juicio ejecutivo que sigue D. José Antonio Villegas, contra la expresada testamentaria.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que el C. Lic. Francisco Gomez Daza, como apoderado sustituto de Dª Ana María Arenas de Limon, viuda y albacea de D. Claudio Antonio Limon, ha promovido este juicio pidiendo amparo y proteccion en favor de los bienes testamentarios de este, contra el procedimiento ejecutivo que ante el juzgado de primera instancia de Jalacingo sigue contra ellos, en cobro de pesos, el C. José Antonio Villegas, por considerar violada la garantía que concede al hombre el artículo 14 de la Constitucion federal, por el procedimiento indicado, puesto que ha juzgado y sentenciado el contrato hipotecario que motivó la demanda, conforme á las leyes que ahora rigen, siendo posteriores á la celebracion de dicho contrato.

Pedido así mismo que se suspendiera el acto reclamado mientras se pronunciaba la sentencia definitiva, el Juzgado se sirvió acceder á la solicitud, y en seguida se pidió el informe justificado que previene la ley, al C. Juez de primera instancia de Jalacingo, quien lo emitió manifestando, que su procedimiento es legal y que por las razones que expresa, no ha violado la garantía que otorga el art. 14; y en este concepto, á pedimento del actor, se recibió á prueba

este juicio, y en consecuencia, se pidió al Juzgado de Jalacingo testimonio del expediente que se promovió para el embargo precautorio de los bienes raíces hipotecados, que después se embargaron definitivamente para la continuación del juicio ejecutivo. Y habiéndose dispuesto por el Juzgado, que las partes presentaran sus respectivos alegatos con vista de las constancias de autos, entre las cuales se encuentran algunos escritos presentados por el C. Manuel Díaz Mirón y C. Lic. Manuel Villegas, como apoderados de D. José Antonio del mismo apellido, el infrascrito ha examinado detenidamente la cuestión, y observa que el C. Lic. Claudio Limón, como representante de la Señora albacea de su padre D^a Ana María Arenas de Limón, presentó un escrito en 26 de Agosto de 1873, fojas 15, pidiendo se pongan en almoneda dos fincas de las embargadas, para cubrir el crédito que se le reclamaba, y manifiesta á la vez que oportunamente señalaría casa en Jalacingo, en donde se le hicieran las notificaciones; que la expresada Señora presentó otro escrito en 22 de Noviembre del mismo año, fojas 16, en unión de su hijo y apoderado el Lic. D. Claudio Limón, en que manifiestan al Juzgado de Jalacingo, que el segundo se presentaría dentro de quince ó veinte días, para que con él se entendieran las diligencias; que el C. Lic. Francisco Gómez Daza, en representación de la misma Señora, hizo viaje expreso á Jalacingo como apoderado de ella, y habiéndose enterado de que se había pronunciado sentencia definitiva en su auscencia y rebeldía y nombrándose un defensor que representara á la testamentaria del Sr. Limón, presentó escrito acompañando su poder en 3 de Enero último, interponiendo el recurso de apelación y subsidiariamente el de nulidad contra la sentencia de remate; y sin esperar la sustanciación y resolución de esos recursos inmediatos que las leyes del Estado conceden á las partes para remediar el agravio que hubiesen resentido, se separó el expre-

sado Lic. Gómez Daza de la población, abandonando el juicio ejecutivo, para venir á esta Ciudad á promover, como lo hizo, el presente de amparo.

Los actos indicados acreditan de una manera indudable, que la albacea de la testamentaria del Sr. Limón y sus dos apoderados, su hijo y el Lic. Gómez Daza, han consentido expresamente el procedimiento ejecutivo contra el cual se ha promovido ahora este de protección y amparo, en lugar de haberse opuesto desde el principio, sin constituir apoderado en el lugar del juicio, y haciendo por el contrario la correspondiente protesta para que en ningún tiempo les parara perjuicio su silencio, por lo que no tienen ya el derecho de alegar ante la justicia federal la violación de que se queja para obtener el remedio que la ley concede en estos casos, pues no autoriza la ley, ni la moral, ni el buen sentido, que se apruebe y repruebe á la vez un mismo procedimiento judicial.

Por estas razones, el suscrito Promotor considera que no es de accederse al amparo que se solicita, omitiendo por lo mismo entrar en el exámen de los puntos relativos á los derechos que se adquirieron por la testamentaria deudora desde la fecha en que se celebró el contrato hipotecario, y si esos derechos han sido perjudicados en el juicio que ha dado lugar á esta queja.

Funda su sentir el infrascrito, en que por los términos precisos y textuales de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, y 1^o y 2^o de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el juicio sobre amparo y protección no es extraordinario, puesto que ha sido establecido para que pueda promoverse siempre que se violen garantías individuales por leyes ó actos de cualquiera autoridad ó funcionario que infrinja la Constitución general, cuando la federal vulnere ó restrinja la soberanía de los Estados, ó por la invasión que las autoridades de estos lucieren á la esfera de la federal, sin que esas disposiciones claras y terminantes, ha-

yan distinguido los casos en que debe ocurrirse previamente á los recursos ordinarios que la ley conceda contra la autoridad ó funcionario que hubiese infringido la Constitución en los tres casos indicados, además de que no habría sino uno solo en que no se considerase que habría recursos ordinarios, cual es aquel en que el poder legislativo sea el que cause la reclamación, y es constante que los tribunales federales han conocido indistintamente de todos los recursos de amparo que se han solicitado antes ó después de haber usado de otros que han considerado apropiados para su objeto, como se advertirá por la multitud de ejecutorias de la Suprema Corte que se han publicado en el Semanario Judicial. Allí se encuentran pidiendo amparo á los que han sido filiados por la fuerza, y sin haberse quejado contra el Gobernador, Jefe político ó Coronel de Batallón que los hubiese violado sus garantías individuales, á fin de que sus respectivos superiores inmediatos revocaran la providencia, han obtenido el amparo que han solicitado de la Justicia federal; y allí se verán también otros muchos que han pedido el mismo amparo contra actos ó providencias de Ayuntamientos, Jueces de primera instancia ó de paz, oficinas de Hacienda y demás funcionarios públicos, sin ocurrir antes al Superior como han podido hacerlo sin el menor inconveniente, y á pesar de eso han sido amparados ó no, según las circunstancias del caso, pero sin hacerse mérito de que el juicio sea subsidiario ó extraordinario.

En corroboración de lo expuesto, es de tenerse presente: que si fuere regla invariable en la práctica no admitir el recurso de amparo sino después de ejercitados infructuosamente los ordinarios ó comunes que la ley conceda contra los actos de cualquiera autoridad ó funcionario que infrinja la Constitución general de los tres modos explicados en su art. 101, bien pudiera asegurarse desde luego, que serian muy contados los juicios de esta clase que se admi-

tieran, y no se ocuparían tanto de ellos los Tribunales de la federación, ni se hubiera formado una obra tan lata que cuenta ya cuatro tomos voluminosos, puesto que su mayor parte se compone de pedimentos y sentencias de juicios de esta clase.

Como consecuencia de lo dicho, resulta: que este juicio que no puede considerarse como extraordinario por lo mismo que emana directamente de la Constitución federal, y mucho menos con el carácter de subsidiario para que tenga lugar á falta de otros recursos, si los interesados en la testamentaría del Sr. Limón aceptaron desde el principio hasta el fin el juicio ejecutivo que les promovió D. José Antonio Villegas en cobro de cuarenta y tantos mil pesos sin haber hecho ninguna demostración de oponerse como puede alegar ahora que ese procedimiento les perjudica en sus garantías individuales? Ninguna ley, ni la razón, ni la equidad apoya tal pretensión; la misma que por otra parte perjudicaría indebidamente al ejecutante, que en su caso tendría que empezar de nuevo el juicio, para que se practicara lo mismo que se ha practicado: el embargo precautorio, el definitivo y la sentencia de remate, con solo la diferencia de que entonces se invocarían otras leyes vigentes á la celebración del contrato, que disponen la misma tramitación que las que ahora rigen, debiéndose notar que son mas benignas estas últimas, porque ordenan que los bienes se vendan en pública subasta al mejor postor, ó de la manera que convengan las partes; que cuando lo embargado exceda en mas de otro tanto del valor que se demanda, podría venderse una parte, y la otra nó si admitiere cómoda división; y no admitiéndola, el postor se arreglará con el deudor en cuanto al resto; y en caso contrario, el Juez dictará la resolución conveniente para conciliar los derechos del acreedor con el menor perjuicio posible del deudor; que el acreedor puede pedir la adjudicación por sus dos tercios del todo ó parte de los bienes embargados; y por último, el

deudor tiene el derecho de que los bienes rematados puedan sacarse nuevamente á remate, en solicitud de nuevo postor que ofrezca mas de la sexta parte del precio en que fincó; y despues de todo esto, todavía tiene el recurso de eutablar juicio ordinario para reclamar mejoras, ó daños y perjuicios á su acreedor.

Por estos fundamentos y artículos citados de la Constitucion, pide á V. se sirva denegar el amparo que solicita el representante de la testamentaria de D. Claudio Antonio Limon.

Heroica Veracruz, 27 de Abril de 1874.—*Lic. J. M. López de Riscalera.*

Es copia que certifico. Heroica Veracruz, Mayo 16 de 1874.—*José María de Manero y Embilez.*—*José María González.*—*Vicente Simancas.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Heroica Veracruz, Mayo 7 de 1874.—Visto el juicio de proteccion y amparo promovido por el C. Lic. Francisco Gomez Daza, representante de la testamentaria de D. Claudio Limon, contra los procedimientos del Juez de Jalacingo, en el juicio ejecutivo que sigue D. José Antonio Villegas contra la expresada testamentaria, quien solicitó la suspension del acto de remate de las fincas embargadas, entre tanto se pronuncia la sentencia definitiva en estos autos, á cuya solicitud accedió el Juzgado, exhortando al Juez de 1ª instancia de Jalacingo para que suspendiera los efectos de la sentencia de remate proferida por el Juez expresado en los referidos autos, cuya disposicion fué acatada por el Juez respectivo, y en consecuencia produjo su informe justificado, en que dice ha procedido conforme á la ley, sin que la testamentaria de Limon tenga motivo de queja, puesto que fué citada con oportunidad en varios actos del juicio, hasta que se le nombró defensor de oficio, y á este se le notificaron las provi-

dencias hasta la sentencia de remate, que es la que tiene apelada la testamentaria Limon fuera de tiempo, por medio de su apoderado D. Francisco Gomez Daza, el cual dice que hay retroactividad en la aplicacion de las leyes del Código del Estado, al aplicarse á hechos ó actos pasados anteriormente á él, y por consiguiente se ha violado la garantía consignada en el art. 14 de la Constitucion federal, juzgando y sentenciando á la expresada testamentaria por leyes dadas con posterioridad al contrato que celebró con el Sr. Villegas, afectando los derechos antes adquiridos; puesta la controversia en tal estado, el Promotor fiscal pidió que no se amparase á la testamentaria que representa el Sr. Daza, fundado en que la testamentaria referida, por medio de sus representantes ha consentido expresamente en el procedimiento ejecutivo, sin haber hecho ningun genero de oposicion desde el principio, y que por consiguiente, nada tiene que alegar ante la Justicia federal, para obtener el amparo que solicita fuera de tiempo, fundándose en varias disposiciones legales; y teniendo presente las constancias de autos; lo alegado por la parte quejosa, con lo pedido por el ministerio fiscal, y

Considerando: Que el principio de la no retroactividad de las leyes se ha tenido como sumamente sencillo, pero en la realidad es muy difícil medir con exactitud su extension, porque en las actuales circunstancias es necesario que se presenten varios casos, en virtud de que la legislacion moderna está sustituyendo á la antigua, en ocasion de que ningun jurisconsulto nuevo se haya dedicado á tratar esta materia, con la extension y eficacia que requiere, y por este motivo es necesario sugetarse á las doctrinas de los antiguos, sin embargo de que siendo el principio de la no retroactividad de una época muy remota, reproducido en el pacto fundamental en los mismos términos que antes, son adaptables sus doctrinas y principios establecidos y admitidos aun por las naciones mas cultas, que

para que haya retroactividad en las leyes, son necesarias dos circunstancias: primera, que la ley vuelva sobre lo pasado y lo mudo; segunda: que vuelva y lo mude con perjuicio de las personas que son objeto de sus disposiciones; vese pues bien resuelta la dificultad, en el texto de la ley 7. O. Legibus. *Leyes et constitutiones futuris certam dare formam negotiis non ad factam præterita revocari.* Agregando á continuacion, á menos que el legislador haya extendido determinadamente su disposicion al tiempo pasado y las cosas todavia pendientes: *cursi nominalin et de præterito tempora et adhuc pendentiibus negotiis cautumsit.* En consecuencia no se podrá considerar como pasado sino lo que ya no está pendiente; pero como en el caso propuesto, se hallaba el contrato pendiente de su cumplimiento, cierto es que aun estaba bajo el dominio del legislador, cuando se publicaron los códigos civil y de procedimientos del Estado.

Que los derechos adquiridos son aquellos que han entrado en nuestro poder, haciendo parte de nuestro patrimonio, y que no pueden quitársenos por aquel de quien los hemos obtenido, como son los derechos adquiridos por un contrato. Pero no son tales los derechos puramente facultativos, á menos que se ejerzan, y que en tal virtud se adquieran las cosas que tienen por objeto las facultades otorgadas por la ley y así mismo por los particulares; las primeras son esencialmente revocablas, y al contrario las segundas; las primeras jamás dejan de ser revocables, porque el legislador no contrata al conceder una facultad; permite, pero no se obliga; conserva siempre el poder de retirar su permiso, y cuando retira la concesion antes de que se use de ella, no hay protesto alguno de queja como no lo hay en el caso presente, pues el legislador de los códigos del Estado bien pudo variar el modo en los procedimientos, sin incurrir en el defecto de la retroactividad combatida por la parte del Inc. Daza.

Que los actos judiciales comenzados se-

gun lo disponen los procedimientos de una ley antigua, deben seguir su orden, no cabe duda de ningun género; pero cuando el procedimientos de tales actos comienza bajo el imperio de una ley posterior, si esta no hace la excepcion indicada para lo sucesivo, no está en el arbitrio de los jurisconsultos ni de los magistrados el suplirla, contra la regla general de que las leyes deben llevarse á efecto desde su publicacion; que en el caso, deben considerarse desde que se publicaron las leyes consignadas en los códigos del Estado, en el sentido que allí se determina, el procedimiento en los juicios ejecutivos, puesto que el art. 14 de la Constitucion federal tampoco hace la excepcion relacionada.

Que las estipulaciones esenciales en un contrato son independientes de las nuevas reglas establecidas por una ley posterior, porque bajo este aspecto pertenecen á lo pasado; mas en cuanto al modo de su ejecucion corresponden á lo porvenir, y por consiguiente la nueva ley es la que sirve de guia. Tal doctrina no solamente es aplicable al cumplimiento de los contratos, sino que tambien se observa en la ejecucion de las sentencias; por consiguiente, en el negocio de que se trata debe seguirse en cuanto á su cumplimiento, lo dispuesto en los códigos del Estado, entendiéndose la doctrina dicha hasta en las causas criminales. —Orat. in Verem, libro 19, capítulo 42.—Puffendorff.—libro 8.—G. 5.—párrafo 15.

Que sin embargo de que los derechos actuales y espectativos estan fuera del alcance de la ley posterior, ésta puede no obstante, sujetar su ejercicio para en lo de adelante á las formalidades, diligencias y condiciones que no dependan de hechos ó acontecimientos extraños á la voluntad de las partes á quienes las impone, con tal que las partes no puedan imputar sino á su propia negligencia el perjuicio que experimentasen por la omision ó falta de cumplimiento de estas condiciones, diligencias ó formalidades.

Que en el caso presente, según el informe rendido por el C. Juez de Jalacingo, se ve que la parte de la testamentaria Limon, no solamente adoleció del defecto de negligencia en el pago estipulado hasta ser demandada por el C. Villegas, sino que por su rebeldía verdadera se siguió el negocio hasta pronunciarse la sentencia de remate, y pasados los términos legales se presentó apelando de la sentencia, interponiendo subsidiariamente el recurso de nulidad, y abandonando estos, promovió además el de amparo.

Que todas las disposiciones del código de procedimientos del Estado, se hallan en armonía con la ley de procedimientos que invoca el quejoso, y aun con las antiguas; de modo que no se ha hecho mas que reproducirlas, por consiguiente, nada hay nuevo sobre tales particulares, hasta que se levantó el auto en que se mandaron rematar los bienes embargados á la testamentaria Limon, y no hay razón que pueda oponerse en contrario; y mucho menos cuando se halla demostrado que la parte de Limon estuvo conforme con el procedimiento adoptado legalmente para seguir el juicio, según se deduce sin violencia, del escrito presentado por la señora albacea de dicha testamentaria, en 26 de Agosto de 1873, foja 15, pidiendo se pusieran en almoneda los bienes para el pago de la cantidad reclamada; en 22 de Noviembre del propio año presentó un segundo escrito foja 16, en unión de su hijo el Lic. Limon, en que dice: que su hijo expresado se presentará al Juzgado de Jalacingo dentro de quince ó veinte días, para que con él se entendiesen las diligencias, lo cual no se verificó; por último: que pronunciada sentencia de remate en ausencia y rebeldía de la señora albacea de Limon, y nombrado previamente el defensor que la representara, el C. Lic. Gomez Daza presentó escrito en 3 de Enero último, acompañando testimonio de poder bastante, interponiendo recurso de apelación, y subsidiariamente el de nulidad de la sen-

tencia de remate, y sin esperar el resultado de estos recursos que le otorgan las leyes del Estado, el Lic. Gomez Daza se separó abandonando el juicio para venir á promover el amparo, y tales actos manifiestan claramente que la señora albacea por medio de sus apoderados, consintió expresamente el procedimiento ejecutivo seguido, sin que hubiesen reclamado desde el principio.

Que el procedimiento en cuanto al remate de los bienes, no solamente se reproduce en los nuevos códigos del Estado, sino que en el modo es mas favorable á la parte de la testamentaria Limon, pues se ordena que se vendan en pública subasta al mejor postor, ó de la manera que convengan las partes, que si lo embargado excede en mas de otro tanto del valor de la deuda, podrá venderse una parte, si es posible la división, y si no la tiene el postor se arreglará con el deudor en cuanto al resto, que si no hay convenio, el Juez á su arbitrio dictará la providencia que crea conveniente para conciliar los derechos del acreedor con el menor perjuicio del deudor, y por último, el deudor tiene derecho para que los bienes rematados puedan salir á nueva subasta en solicitud de postor, que ofrezca mas de la sexta parte del precio en que fincó el remate; y además tiene el deudor el derecho de seguir juicio ordinario para reclamar mejoras ó daños y perjuicios á su acreedor. En consecuencia, si el código del Estado ha innovado en algo la ley antigua, es concediendo al deudor derechos y recursos favorables que esta no concedía, y en esto no hay retroactividad alguna; pero aun cuando no se considere así, como el cumplimiento del contrato se hallaba pendiente, quedó este punto sometido á las disposiciones legales posteriores, como actos no pasados y sujetos á su imperio.

Por estos fundamentos y con arreglo á las doctrinas y disposiciones legales citadas, y á lo preceptuado en el arts. 101 y 102 de la Constitución federal, y primera frac-

cion del art. 10 de la ley de 20 de Enero de 1869, se falla:

1º: La Justicia federal no ampara ni protege á la testamentaria de D. Claudio Limon, contra los procedimientos del C. Juez de 1ª instancia de Jalacingo, seguidos en la secuela del juicio ejecutivo que con arreglo al Código de procedimientos del Estado promovió D. José Antonio Villegas, contra dicha testamentaria.

2º: Elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision, sacándose las copias prevenidas por la ley.

Así lo pronunció y firma el C. Juez 2º de Distrito, ante los de asistencia que damos fé.—*Lic. José M. de Manero y Embides.*—De asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia. H. Veracruz, Mayo 11 de 1874.—*José M. Manero y Embides.*—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 2 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz por el Lic. D. Francisco Gomez Daza, en representacion de la testamentaria de D. Claudio A. Limon, contra los procedimientos y sentencia de remate dictada por el Juez de 1ª instancia del Canton de Jalacingo de dicho Estado, en el juicio ejecutivo que sigue D. José Antonio Villegas contra la espresada testamentaria; visto lo alegado por esta para apoyar la violacion que pretende existir de la garantía otorgada por el art 14 de la Constitucion federal, con el hecho de observar en el juicio las prescripciones del Código de procedimientos de Veracruz, aplicando estas á un contrato celebrado con anterioridad á la fecha en que se declaró vigente el mencionado Código; vistas las constancias de autos y la sentencia del Juez de Distrito de Veracruz, la cual por los

fundamentos que expone, deniega el amparo.

Considerando: que las disposiciones del Código de procedimientos de Veracruz, reglamentarias del juicio ejecutivo, reproducen y confirman las de la ley de administracion de justicia del mismo Estado, anterior á dicho Código, por lo cual este último ninguna variacion sustancial establece con relacion al deudor, que por su novedad afecte derechos preexistentes, razon única por la que pudiera decirse violada la garantía que se invoca.

Considerando: que la parte de la testamentaria de Limon, consintió expresamente en los procedimientos del juicio, como lo comprueba el escrito presentado por su representante en 26 de Agosto de 1873, en el cual despues de reconocer los títulos que fundan las acciones de Villegas, confiesa la demanda y renuncia los trámites sin reserva alguna, y pide la venta en almoneda pública de los bienes embargados de su propiedad, á fin de que sea pagado el ejecutante.

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo que ordenan los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal y 1ª fraccion del art. 1º de la citada ley de 20 de Enero de 1869, se declara: 1º: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez 2º suplente de Distrito del Estado de Veracruz en 7 de Mayo último, que dice: la Justicia federal no ampara ni protege á la testamentaria de D. Claudio Limon, contra los procedimientos del C. Juez de 1ª instancia de Jalacingo, seguidos en la secuela del juicio ejecutivo que con arreglo al Código de procedimientos del Estado, promovió D. José Antonio Villegas contra dicha testamentaria. 2º: Se condena á la testamentaria de D. Claudio Limon al pago de cien pesos de multa, por falta de motivo justificado para interponer este recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de es-

la sentencia, recomendándosele al Juez que en los juicios de amparo no admita por ninguna causa como parte, á otras personas que las designadas en la ley; y en caso de haber persona interesada en que se deniegue el recurso, solo la oiga, si le pareciere necesario, por mera via de instruccion, y sin introducirla en los procedimientos del juicio; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad en el primer punto y por mayoría de votos en el segundo, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 6 de 1874.—*Lic. Donato Pardo*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por los CC. Domingo Mejía, Vicente Pinzon, Julian Caro y Cesareo Tovar, contra el C. Gefe político de Cuauilla Morelos, por violacion de garantías constitucionales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que en 31 de Marzo próximo pasado, los CC. Domingo Mejía, Vicente Pinzon, Julian Caro y Cesareo Tovar, presentaron á este Juzgado, el 31 de Marzo próximo pasado, un escrito, diciendo que el Gefe político del Distrito de Morelos les habia exijido con grande apremio, quince pesos al primero y diez á cada uno de los demas, como multas que

TOMO VI.—PARTE II.

les impuso el 2º Colegio electoral, por no haber concurrido al nombramiento de Procurador General de la Nacion y Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, que se verificó el 8 del mismo mes; y quejándose de que con ese procedimiento se violaron en sus personas las garantías que otorgan los arts. 16 y 17 de la Constitucion, por que la ley no da facultades al Colegio para imponer penas á los electores que no concurren, y en el caso de que ese hecho fuera un delito, estaria exclusivamente sujeto á los tribunales federales; pedian se les ampara-se en el goce de esas garantías, haciendo que cuanto antes les fuesen devueltas esas multas que habian enterado ya, por que supieron que el C. Domingo Mejía fué reducido á prision, por que no pudo hacer el pago en el acto que se le requirió para ello.

Con fecha 4 de Abril, mientras se esperaba el informe con justificacion de la Gefatura política de Morelos, se recibió un oficio de la misma autoridad consignando á este Juzgado la falta de asistencia de los electores expresados y de los CC. Bonifacio Basaldica y Manuel Solís, conforme á la Orden del Gobierno del Estado de 16 de Marzo, en que se previno á aquella autoridad lo hiciera así, y devolviera las multas á los mencionados electores.

En vista de ese oficio, el Juzgado mandó preguntar á los quejosos si supuesta la devolucion de las multas insistian en este recurso, y contestaron unanimente que sin embargo de que en efecto se les habian devuelto las multas, insistian en el amparo que tenian solicitado.

Recibido despues el informe con justificacion, se mandaron pasar los autos al que suscribe para que pidiera conforme al art. 9º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Segun el art. 23 de esta ley, el efecto de una sentencia que concede amparo, es que se restituyan las cosas al estado que guardaban antes de violarse la Constitucion; y conforme al art. 102 del pacto federal, la sentencia en los juicios de amparo será siem-